

Suplentes	DNI	Titulación	Catice
Fernández Calvar, M. ^a Begoña	44.086.017-P	Titulada Superior.	Vigo.
Pena Sánchez, Víctor David	78.733.283-M	Titulado Superior.	Vigo.
Rial Hermelo, Gloria	53.113.814-Y	Formación Profesional.	Vigo.
Rodríguez Brañas, Cristina	53.114.180-G	Formación Profesional.	Vigo.
Alonso Lobato, M. ^a Paz	12.402.034-C	Formación Profesional.	Vigo.
Montero de Espinosa Díez de Tejada, Ramón	8.854.333-T	Titulado Superior.	Sevilla.
Miranda Losa, Carmen	30.944.605-Z	Titulada Superior.	Sevilla.
Navarrete Llinás, Víctor	80.049.041-W	Titulado Superior.	Sevilla.
Méndez Arroyo, Ángela	7.966.828-L	Titulada Superior.	Sevilla.
Barbero Martínez, M. ^a Natividd	13.153.836-K	Titulada Superior.	Sevilla.
Hidalgo García, María	75.412.990-S	F. Profesional 2.º Grado .	Sevilla.
Tinoco Rodríguez, María Dolores	34.779.496-T	F. Profesional 2.º Grado .	Sevilla.
Gamiz Gracia, Laura	24.262.551-N	Titulada Superior.	Almería.
Montero de Espinosa Díez de Tejada, Ramón	8.854.333-T	Titulado Superior.	Almería.
Miranda Losa, Carmen	30.944.605-Z	Titulada Superior.	Almería.
Navarrete Llinás, Víctor	80.049.041-W	Titulado Superior.	Almería.
Fernández Castilla, Óscar	45.584.543-S	Titulada Superior.	Almería.
Barbero Martínez, M. ^a Natividad	13.153.836-K	Titulada Superior.	Almería.
Montero de Espinosa Díez de Tejada, Ramón	8.854.333-T	Titulado Superior.	Huelva.
Miranda Losa, Carmen	30.944.605-Z	Titulada Superior.	Huelva.
Navarrete Llinás, Víctor	80.049.041-W	Titulado Superior.	Huelva.
Méndez Arroyo, Ángela	7.966.828-L	Titulada Superior.	Huelva.
Barbero Martínez, M. ^a Natividd	13.153.836-K	Titulada Superior.	Huelva.
Méndez Arroyo, Ángela	7.966.828-L	Titulada Superior.	Malaga.
Fernández Castilla, Óscar	45.584.543-S	Titulado Superior.	Malaga.
Barbero Martínez, M. ^a Natividad	13.153.836-K	Titulada Superior.	Malaga.
Navarrete Llinás, Víctor	80.049.041-W	Titulado Superior.	Malaga.
Miranda Losa, Carmen	30.944.605-Z	Titulada Superior.	Malaga.

294

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2002, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo nominal de interés que devengarán las Obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisión diciembre 1992 a tipo variable, durante el próximo período de interés.

En virtud de lo previsto en el punto 2.3.2. del folleto informativo de emisión de las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisión diciembre 1992 a tipo variable, que el Estado ha asumido por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre,

Esta Dirección General hace público:

1. La media aritmética del promedio entre los tipos máximo y medio del Mibor a seis meses, publicados en el «Boletín de la Central de Anotaciones del Banco de España», durante los cinco días hábiles inmediatamente anteriores al día 22 de diciembre de 2002, y que se detallan a continuación, ha sido el 2,873 por 100.

Mibor a seis meses

Fecha	Medio	Máximo	Promedio
20	2,86	2,86	2,860
19	2,88	2,88	2,880
18	2,88	2,88	2,880
17	—	—	—
16	—	—	—

2. En consecuencia, el tipo de interés nominal que devengarán el próximo 22 de junio de 2003 las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisión diciembre 1992 a tipo variable, será del 2,87 por 100, determinándose el importe bruto del cupón a pagar de la forma prevista en el apartado 2.3 del folleto informativo de emisión, según la siguiente expresión:

$$I = \frac{N \times i \times t}{360}$$

donde I son los intereses brutos devengados, N es el nominal, i el tipo de interés nominal expresado en tanto por uno y t los días naturales del período de interés, en este caso ciento ochenta y dos días.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—La Directora general, P. S. (Ley 30/1992 y Resolución de 11 de diciembre de 2002), el Subdirector general para Asuntos de la Unión Económica y Monetaria, Íñigo Fernández de Mesa Vargas.

295

ORDEN ECO/3367/2002, de 9 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de octubre de 2002, que declara el incumplimiento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 24 de octubre de 2002, adoptó un Acuerdo, por el que se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente S/211/P04 en la Zona de Promoción Económica de Cantabria, del que es titular la empresa «Sidenor Industrial, Sociedad Limitada»;

Considerando la naturaleza y características de dicho Acuerdo, este Ministerio tiene a bien disponer:

Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al texto íntegro del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de octubre de 2002, por el que se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente S/211/P04 en la Zona de Promoción Económica de Cantabria, del que es titular la empresa «Sidenor Industrial, Sociedad Limitada». Dicho texto se incluye como anexo a esta Orden.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Vicepresidente Segundo de Gobierno y Ministro de Economía, P. D. (Orden ECO/2498/2002, de 3 de octubre), el Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado Blanco

ANEXO

Texto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

El Ministerio de Economía, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 302/1993, de 26 de febrero y 2315/1993, de 29 de diciembre, para los casos de incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos en las Zonas promocionables, delimitadas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, eleva a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la siguiente propuesta de

ACUERDO

Examinado el expediente S/211/P04 de concesión de incentivos regionales en la Zona de Promoción Económica de Cantabria, del que es titular la empresa «Sidenor Industrial, Sociedad Limitada», a los efectos de verificar si ha cumplido las condiciones establecidas para el disfrute de dichos incentivos, de conformidad con el artículo 34.1.b) del Real Decreto 535/1987, modificado por Real Decreto 302/1993 y teniendo en consideración los siguientes

Antecedentes de hecho

1. Los incentivos fueron otorgados por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de junio de 1999 y notificados el 1 de julio de 1999 por medio de resolución individual que establecía las condiciones específicas y plazos para su cumplimiento, vinculantes para el disfrute de los expresados incentivos, resolución individual que fue aceptada por la empresa el 14 de septiembre de 1999.

2. El 11 de octubre de 2001 la Comunidad Autónoma de Cantabria emitió informe sobre ejecución del proyecto, del que se deduce el incumplimiento en la creación y mantenimiento de empleo y por ello se inició el oportuno expediente de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, y en la Orden de 23 de mayo de 1994. Instruido el expediente de incumplimiento, se pone de manifiesto el incumplimiento total de la condición de crear y mantener cinco nuevos puestos de trabajo, ya que el nivel de empleo computable en los términos establecidos en la resolución individual, en el centro de trabajo objeto del proyecto, no alcanza, al final del período de vigencia, el existente al solicitar los beneficios.

3. El final del plazo de vigencia de los incentivos regionales, fecha en la que deben cumplirse todas y cada una de las condiciones de la concesión de los incentivos, es el 1 de julio de 2000.

A los hechos anteriores son de aplicación los siguientes

Fundamentos de Derecho

1. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, según el artículo 5 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, dado que la cuantía de la inversión aprobada es de 9.729.544,55 euros.

2. En la instrucción del expediente se han observado todas las formalidades legales, habiéndose concedido a la empresa afectada los plazos preceptivos para los trámites de presentación de alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por el Real Decreto 302/93 de 26 de febrero, y en el apartado 8.º de la Orden de 23 de mayo de 1994.

El interesado presentó alegaciones con fecha 26 de marzo de 2002, en las que señala que creó solamente dos de los cinco puestos de trabajo exigidos, por lo que, aun en el supuesto de que hubieran sido admitidas, determinarían también el incumplimiento total del expediente, al ser el porcentaje de incumplimiento superior al 50 por 100.

3. El apartado d) del artículo 37.2 del Real Decreto 1535/1987, modificado por el Real Decreto 302/1993, establece que procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés desde el momento del pago de la subvención, cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención. Asimismo el punto 3 del citado artículo 37 determina que tratándose de incumplimiento referente a la condición de la cuantía de la inversión el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente a la inversión dejada de practicar o practicada indebidamente, siempre que no exceda del 50 por 100; igualmente el apartado 4

determina que tratándose de incumplimiento de condiciones referentes a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo el alcance del incumplimiento se determinará en la proporción en que dicha condición haya quedado incumplida y si supera el 50 por 100 o tuviera como resultado la destrucción del empleo se entenderá que es total; el apartado del mismo artículo establece que si el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna condición o supuesto distinto de los anteriores, su alcance será determinado en función del grado y de la entidad de la condición incumplida. Por último el apartado 7 determina que la concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación conjunta de las mismas.

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 302/1993, de 26 de febrero y 2315/1993, de 29 de diciembre; el Real Decreto 490/1988, de 6 de mayo, y, el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; la Orden de 23 de mayo de 1994; la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y demás disposiciones de aplicación, así como el informe de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales,

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Economía resuelve:

Declarar el incumplimiento total de condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales en la Zona de Promoción Económica de Cantabria, concedidos a la empresa «Sidenor Industrial, Sociedad Limitada», en el expediente S/211/P04 con la consiguiente pérdida de los incentivos concedidos, que ascendían a 1.362.136,24 euros.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación del mismo, o bien, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

296

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de modificación de la Resolución de 8 de noviembre de 2001, por la que se adjudican recursos públicos de numeración a la colonia británica de Gibraltar.

Las llamadas telefónicas entre España y Gibraltar se han venido realizando mediante la marcación del indicativo provincial de Cádiz seguido del número del abonado de la colonia. Esto es posible debido a que España accedió en 1986 a incluir a Gibraltar en el plan de numeración español, adjudicándole 30.000 números telefónicos del rango «9567», perteneciente a la provincia de Cádiz.

En base a la solicitud formulada por las autoridades británicas de concesión de nuevos bloques de números telefónicos para hacer frente a las necesidades gibraltareñas, esta Secretaría de Estado dictó la Resolución de 8 de noviembre de 2001, por la que se adjudicó a la colonia el rango «8563», incluido en el bloque de numeración geográfica «856», también perteneciente a la provincia de Cádiz. Ello supuso la puesta a disposición de Gibraltar de un tramo de 100.000 números telefónicos.

No obstante, dado que los bloques de numeración pertenecientes al segmento «9567» se encontraban duplicados en el nuevo «8563», y al objeto de optimizar la gestión de los recursos, la citada Resolución fijó el 31 de diciembre de 2002 como fecha en la que los bloques incluidos en el rango «9567» pasarían a disposición de la provincia de Cádiz, quedando el «8563» como único indicativo de Gibraltar.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado tercero de la citada Resolución de 8 de noviembre de 2001, los bloques de numeración pertenecientes al rango «9567» fueron inscritos, por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a nombre de Telefónica de España, SAU, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria, punto 3,